



**DE LOS AMIGOS DEL TRIBUNAL Y OTROS TERCEROS  
(LOS PERITOS Y SPECIAL MASTER) <sup>1,2</sup>**

***OS AMIGOS DO TRIBUNAL E OUTROS TERCEIROS  
(OS PERITOS E O MESTRE ESPECIAL)***

***FRIENDS OF THE COURT AND OTHER THIRD PARTIES  
(EXPERTS AND SPECIAL MASTER)***

*María Victoria Mosmann<sup>3</sup>*

*Macarena Cornejo<sup>4</sup>*

**RESUMEN:** Desde hace ya décadas que en las sociedades en que nos desenvolvemos se plantean escenarios conflictivos cada vez más complejos tanto por los derechos como o los actores en juego, los que generalmente, aunque no siempre, transitan por procesos colectivos. Ello necesariamente implica que las soluciones adoptadas requieran asimismo de una mayor elaboración y hasta creatividad, siempre dentro de los márgenes de la legalidad entendida en un sentido amplio. Es en el marco de esta evolución que la intervención de los *amicus curiae*, en forma previa al dictado de la sentencia, fue adoptada, desde el derecho anglosajón, a nuestro medio, encontrándose actualmente ampliamente aceptada. A la luz de ese antecedente, y en luego de un análisis documental respecto de la existencia de otros terceros ajenos al proceso, distintos a los *amicus curiae* en el derecho norteamericano, en el presente trabajo exploratorio nos preguntamos si la el marco legal vigente en nuestro país permite la adopción de dichas figuras. Así, luego de la reseña de casos jurisprudenciales locales en los que el dictado de sentencias estructurales, cuyo cumplimiento exige un seguimiento experto y focalizado, arribamos a la conclusión de que, tal como ha sucedido con los *amicus curiae*, en determinadas situaciones y realizando la adaptaciones necesarias, no solo podría recurrirse a otro tipo de terceros ajenos al proceso sino que ello sería aconsejable a los fines de hacer justicia.

**PALAVRAS CLAVE:** Legalidad; procesos colectivos; *amicus curiae*; justicia.

<sup>1</sup> Artigo recebido em 09/12/2022, sob dispensa de revisão.

<sup>2</sup> El presente trabajo fue publicado por sus autoras en al Revista Institutas de la editorial IJ y puede ser consultado en el siguiente link <https://ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=ce3f66a4f6c213b9f560a7962d3c2218>

<sup>3</sup> Miembro titular de la AADP y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Directora del Instituto de Investigaciones del Colegio de Magistrados de Salta; Presidente de la Comisión de Investigación en Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Salta desde su creación. Directora del Ateneo de Derecho Procesal de Salta de la Federación Ateneos de Estudios de Derecho Procesal. Jueza de Primera Instancia en la Provincia de Salta. Buenos Aires, Argentina. E-mail: mvmosmann@gmail.com

<sup>4</sup> Especialista en Derecho de Daños por la Universidad del Litoral. Especialista en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Instituto de Investigación de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Salta. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Abogada Auxiliar en el Poder Judicial de la Provincia de Salta. Buenos Aires, Argentina.



**RESUMO:** Há décadas, as sociedades em que vivemos enfrentam cenários de conflito cada vez mais complexos, tanto em termos dos direitos quanto dos atores em jogo, que geralmente, embora nem sempre, envolvem processos coletivos. Isto implica necessariamente que as soluções adotadas também requerem maior elaboração e até mesmo criatividade, sempre dentro das margens da legalidade entendida em sentido amplo. É no âmbito desta evolução que a intervenção do *amicus curae*, antes da aprovação do julgamento, foi adotada de direito comum para nosso país e agora é amplamente aceita. À luz deste precedente, e após uma análise documental da existência de outros terceiros fora do processo, além do *amicus curae* no direito norte-americano, neste documento exploratório nos perguntamos se o quadro jurídico atual em nosso país permite a adoção de tais números. Assim, após analisar casos jurisprudenciais locais nos quais a emissão de julgamentos estruturais, cujo cumprimento requer um acompanhamento especializado e focalizado, chegamos à conclusão de que, como aconteceu com o *amicus curae*, em determinadas situações e fazendo as adaptações necessárias, não só poderiam ser utilizados outros tipos de terceiros fora do processo, mas seria aconselhável para fins de fazer justiça.

**PALAVRAS-CHAVE:** Legalidade; processos coletivos; *amicus curiae*; justiça.

**ABSTRACT:** For decades now, the societies in which we live have been facing increasingly complex conflict scenarios, both in terms of the rights and the actors at stake, which generally, although not always, involve collective processes. This necessarily implies that the solutions adopted also require greater elaboration and even creativity, always within the margins of legality understood in a broad sense. It is within the framework of this evolution that the intervention of *amicus curae*, prior to the issuance of the judgment, was adopted from common law to our country and is now widely accepted. In the light of this precedent, and after a documentary analysis of the existence of other third parties outside the process, other than *amicus curae* in American law, in this exploratory work we ask ourselves whether the legal framework in force in our country allows the adoption of such figures. Thus, after reviewing local jurisprudential cases in which the issuance of structural judgments, whose compliance requires expert and focused monitoring, we conclude that, as has happened with the *amicus curae*, in certain situations and making the necessary adaptations, not only could other types of third parties outside the process be used, but it would be advisable for the purpose of doing justice.

**KEYWORDS:** Legality; collective processes; *amicus curiae*; justice.

## 1. INTRODUCCIÓN

A la hora de pensar en terceros colaboradores del tribunal, acude casi inmediatamente a nuestra cabeza la figura del “amicus curiae”, cuyo propio nombre hace referencia a una ayuda desinteresada y honesta, la de un amigo. Tal como pasa con los amigos en la vida misma, veremos que no siempre estas condiciones se cumplen en la realidad, circunstancia que además es conocida y aceptada.

Ahora bien, aceptar la ayuda de terceros en el proceso, enfocada, al menos en su concepción original, más hacia las necesidades de los jueces que de las partes, fue posible en el contexto de la llegada a la justicia de causas complejas demandantes de miradas multidireccionales.

Este escenario de causas intrincadas en las que actúan múltiples partes e involucran derechos de distinta jerarquía, y por ende requieren de soluciones igualmente sofisticadas, no



hace sino expandirse, empujado entre otras razones por la constante democratización de los derechos.

Frente a ello cabe plantearse si, ante este tipo de procesos, resulta suficiente la intervención de los *amicus curiae* o si es posible que, así como alguna vez estos terceros vinieron a aportar remedios oportunos, se pueda recurrir a otras figuras que coadyuven en la consecución de soluciones equitativas pero asimismo reales y eficaces.

## 2. BREVE REPASO

Como sucede con tantas cosas, el *amicus curiae* tuvo su momento de gloria y suscitó una gran revuelo cuando la institución fue introducida por la jurisprudencia y después legislada por la CSJN, para luego sufrir el olvido en el que caen las cosas que dejan de ser novedosas.

Ello no significa que la figura cayera en desuso, por el contrario, existe amplia jurisprudencia que da cuenta de su utilización en diversos fueros y hasta en las primeras instancias, concitando en este aspecto todavía debates al respecto<sup>5</sup>. Existe un consenso casi unánime<sup>6</sup> en que esta figura tiene su origen en el derecho romano, de donde fue adoptada por el *common law*, medio en el que su utilización se generalizó, siendo aceptada por todos los países que abrevan en este sistema. Claro que esta dispersión de usos por distintas jurisdicciones implica también un alto rango de definiciones, caracteres, regulaciones y demás aspectos que hacen a una institución jurídica que empuja hacia una definición amplia de esta figura en estos sistemas. Así en un intento de establecer un concepto abarcativo se ha afirmado que la intervención del *amicus curiae* consiste en un presentación voluntaria ante un tribunal por una entidad o un tercero respecto de las partes y de los funcionarios judiciales intervinientes

<sup>5</sup>Ver por ejemplo a Durrieu, Roberto (h.) en “Repensando el rol del *amicus curiae* en el derecho penal argentino” TR LALEY AR/DOC/4119/2019.

<sup>6</sup> Esta tesis es discutida por Crema, Luigi en “TheCommonLaw (And NotRoman) OriginsofAmicusCuriae in International Law – Debunking a Fake NewsItem” (2019) Global Jurist. 20.10.1515/gj-2019-0038. [https://www.researchgate.net/publication/338027720\\_The\\_Common\\_Law\\_And\\_Not\\_Roman\\_Origins\\_of\\_Amicus\\_Curiae\\_in\\_International\\_Law\\_-\\_Debunking\\_a\\_Fake\\_News\\_Item/citation/download](https://www.researchgate.net/publication/338027720_The_Common_Law_And_Not_Roman_Origins_of_Amicus_Curiae_in_International_Law_-_Debunking_a_Fake_News_Item/citation/download) Del mismo criterio parece parrticipar Osvaldo Gozaini, tal como surge de “Las pruebas de colaboración” (2010) TR LALEY AR/DOC/722/2010.



en el pleito, de forma tal que el presentante mantiene una discrecionalidad substancial sobre el contenido de su presentación<sup>7</sup>.

Es interesante destacar que, tal como señala el autor antes citado, la figura del *amicus* parece constituir un “momentum del civil law en el common law”, ya que la misma resultaría más afín al primer sistema que al segundo. Ello en función que, en el *civil law* se reconocen facultades inquisitoriales en cabeza de los jueces que resultan totalmente ajenas a los sistemas típicamente adversariales del *common law* en los que se trata de dos partes enfrentadas que deben traer frente al tribunal la evidencia que convenza al juez acerca de la validez de la posición que sostienen, repeliendo cualquier intervención extraña a ellas<sup>8</sup>.

### 3. MIENTRAS TANTO EN ARGENTINA...

Tal como se ha expuesto en reiteradas ocasiones<sup>9</sup>, en Argentina la figura del *amicus* fue introducida, sin respaldo legislativo alguno, durante los juicios llevados a cabo contra las juntas militares por los crímenes cometidos durante el último gobierno de facto sufrido por nuestro país. A partir de allí comenzó un derrotero jurisprudencial que tuvo el reconocimiento normativo expreso primero en la Ley 24.488 de Inmunidad de Jurisdicción sancionada el año 1995 para luego comenzar un camino de recepción positiva en distintos ordenamientos provinciales.

En el ámbito federal la Corte Suprema de Justicia reconoció la figura en el año 2003 mediante Acordada 28/2004, luego modificada por la acordada y 14/2006, resultando ambas derogadas por la acordada 7/2013 que regula el régimen actualmente vigente.

<sup>7</sup> STEVEN KOICHEVAR “Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions”, *The Tale Law Journal* (2013) 122:1653 consultado en [https://www.yalelawjournal.org/pdf/1158\\_hvj33ruz.pdf](https://www.yalelawjournal.org/pdf/1158_hvj33ruz.pdf).

<sup>8</sup> En Estados Unidos la presentación de los *amicus curiae* se encuentra admitida por el artículo 37 de las Reglas de la Suprema Corte (Rules of the Supreme Court of the United States) y el art. 29 del procedimiento federal de apelaciones (Federal Rules of Civil Procedure) pensada originalmente con el fin principal de ilustrar a la corte acerca de los efectos que sobre terceros ajenos al proceso tendría la sentencia a ser dictada en un sentido u en otro hasta evolucionar al panorama actual, en el que estas participaciones han dejado de ser neutrales para apoyar explícitamente a la posición de una parte, a veces incluso aportando nueva evidencia nueva y planteando hechos nuevos.

<sup>9</sup> MOSMANN, “Amicus Curiae”, *Revista Temas Judiciales* nro. 4; MOSMANN – DOMINGUEZ, “Amicus Curiae”, *Revista Temas Judiciales* nro. 15; MOSMANN - ARDOY, “Recurso de Inaplicabilidad de Ley”, *Tratado de los Recursos*, MIDÓN Director, Ed. Rubinzal-Culzoni, t. II, ps. 571/604; MOSMANN - ARDOY, “Algunas cuestiones sobre la Jurisprudencia Uniforme y los Amicus Curiae”, *Precedentes, Colección Grandes Temas del Novo CPC*, Editora Jus Podium, Salvador Brasil, t. 3, ps. 701/728



La reglamentación limita la participación del *amicus* a los juicios que se tramiten en la competencia originaria de la Corte, lo que no ha sido obstáculo para que en numerosos se admita la intervención en esta calidad en otras instancias, especialmente en el fuero penal<sup>10</sup>.

Además, establece que la posibilidad de oír *amicus* en un juicio se encuentra reservada a una decisión de la Corte, que puede establecer que determinado juicio sea pasible de este tipo de intervenciones por motu proprio o a partir de la solicitud, debidamente fundada, que realice un tercero. La Corte ha expresado que “la decisión sobre la participación de Amigos del Tribunal en las causas que tramitan ante esta Corte Suprema, así como la selección de quiénes efectuarán sus informes orales en las audiencias públicas son potestades exclusivas de este Cuerpo, sin que quepa admitir al respecto objeciones o impugnaciones de las partes intervinientes en ellas (arts. 6º de la acordada 30/2007 y 8º y 9º de la acordada 7/2013)”<sup>11</sup>.

Sostiene como finalidad de los *amicus* el enriquecimiento del debate introduciendo cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas. En ese sentido, exige que ostente una reconocida competencia sobre la cuestión debatida (Art. 1 acordada 7/2013).

Destaca como beneficio de la institución que permite pluralizar y enriquecer el debate constitucional, así como fortalecer la legitimación de las decisiones jurisdiccionales dictadas por la Corte. Además, tal como mencionaba en sus considerandos la acordada 28/2004, mediante la cual instauró la figura, la recepción de esta permite dar acabado cumplimiento a las normativas internacionales, exigibles en virtud del art. 75 inc. 22º de la Constitución Nacional, que contemplan este tipo de intervenciones.

Resulta destacable que la neutralidad en la opinión que se expresa ya no resulta un requisito de admisión del *amicus*. Por el contrario, la acordada vigente exige que quién intervenga como amigo del tribunal manifieste cuál es la parte a la que apoya con sus argumentos, no encontrándose excluido quien haya recibido o un beneficio económico de esta parte o vaya a verse beneficiado por el resultado del juicio, siendo suficiente que declare dicha circunstancia.

<sup>10</sup>Durrieu, Riberto, op. cit.

<sup>11</sup> Asociación Civil Macame y otros c/ Estado Nacional Argentino P.E.N. s/amparo ley 16986- 16/04/2022.



Claramente la parcialidad admitida tiene lugar en el plano de las ideas que trascienden a la cuestión concreta que constituye el “caso” traído a colación frente al tribunal, ya que el *amicus* no puede introducir elementos desequilibrantes alterando la situación procesal de la parte a la que apoya. En ese sentido, la reglamentación prohíbe que se introduzcan hechos nuevos o pruebas nuevas que además no hayan sido oportunamente propuestas por las partes. Más allá de otras coincidencias que resultan obvias debido a la relación de contagio antes vislumbrada, nos interesa destacar que tanto en el sistema del *common law* como en el argentino, el *amicus curiae* se define como un tercero respecto de todos los sujetos del proceso.

Ello aun cuando defienda la posición ideológica de una de las partes mediante el aporte de conocimientos expertos y colabore, por eso mismo, con el juez o tribunal.

#### 4. LOS OTROS AYUDANTES DEL TRIBUNAL (PERITOS Y SPECIAL MASTER)

Sentado entonces que los amigos del tribunal colaboran con el tribunal ampliando con conocimientos expertos y fundamentados, sobre algún aspecto del tema a decir, surge claro que esa ayuda se otorga en forma previa al dictado de la sentencia.

Sin embargo, ellos no son los únicos terceros con los que el juez puede contar en forma previa al dictado de la sentencia, etapa en la que aparecen como auxiliar del juez el perito designado de oficio por el juez o a solicitud de las partes y el perito científico que interviene a requerimiento del tribunal en los términos del art. 472 CPCC. Ambas figuras guardan similitudes con el *amicus curiae*<sup>12</sup>, destacándose como la más prominente el hecho de que su participación en el proceso tiene como finalidad aportar conocimiento experto al tribunal<sup>13</sup>. A lo que se añade que, en ambos casos, las opiniones y conclusiones vertidas no resultan vinculantes para el o los magistrados al momento de decidir. Ciertamente es que la pericia en su carácter de prueba -al contrario de lo que sucede con la presentación del *amicus*-, debe ser valorada por el juez, quién debe justificar, en su caso, el apartamiento de las conclusiones del perito.

Existe, no obstante las coincidencias antes mencionadas, una diferencia fundamental entre estos terceros, ya que los peritos, cualquiera sea el origen de su designación, deben

<sup>12</sup> “Mosmann, María Victoria “La prueba pericial y los *amicus curiae*” en “La Prueba pericial” op. cole. Dir. María Victoria Mosmann, Coord. Sofía Beneavidez- Ed. Bibliotex, Tucumán, 2020.

<sup>13</sup> Gozáini, Osvaldo A. “Las pruebas de colaboración” (2010) TR LALAY AR/DOC/722/2010.





guardar neutralidad. Esta condición, inherente a la calidad de perito, no es exigible a los amigos del tribunal, tal como fuera puesto de manifiesto anteriormente.

Ahora bien, ¿resulta suficiente que el tribunal reciba ayuda solo en la etapa previa al dictado de la sentencia?, o ¿pueden los tribunales contar con terceros en otro tramo del proceso?

Nuestro Tribunal Címero parece haber dado una pista en el caso “Mendoza”<sup>14</sup> al delegar la ejecución de sentencia en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes -luego removido-, a quien también facultó para fijar el valor de las multas diarias derivadas del incumplimiento del programa establecido en la sentencia y confiar asimismo a la Auditoría General de la Nación el control de la ejecución de los fondos para el cumplimiento de dicha sentencia. El mandato otorgado a este organismo fue recientemente reiterado en el trámite judicial de ejecución<sup>15</sup>.

Resulta asimismo destacable lo actuado por el máximo tribunal federal y el correspondiente a la provincia de Buenos Aires en la causa Vertsbisky. En una primera sentencia<sup>16</sup>, la Corte Suprema, ordenó la puesta en marcha de programa destinado a mejorar las condiciones de la población carcelaria en la Provincia de Buenos Aires adaptándolo a estándares internacionales. En esta oportunidad, si bien reenvió la ejecución de sentencia a la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA), estableció una mesa de diálogo para obtener avances progresivos y consensuados sobre la materia de fondo en discusión. Dos años después de recibirla, el máximo tribunal provincial declaró finalizada la etapa de ejecución de sentencia, lo que originó una nueva demanda que en la que nuevamente existió un pronunciamiento de la CSJN en el año 2021<sup>17</sup>. En un fallo dividido, sostuvo que la sentencia dictada en el año 2005

<sup>14</sup> Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)” CSJN 08/07/2008.

<sup>15</sup> Verbic, Francisco “Ejecución de sentencias en litigios de reforma estructural en la república argentina. Dificultades políticas y procedimentales que inciden sobre la eficacia de estas decisiones”, Ponencia General presentada por el autor en la sub-comisión de derecho procesal constitucional “Ejecución de sentencias en litigios estructurales y complejos. La eficacia del Poder Judicial en el control de políticas públicas”, XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Córdoba, Argentina, 18-20 de Septiembre de 2013, consultada en [https://www.academia.edu/33441612/Ejecuci%C3%B3n\\_de\\_sentencia\\_en\\_litigios\\_de\\_reforma\\_estructural\\_Dificultades\\_pol%C3%ADticas\\_y\\_procedimentales\\_que\\_inciden\\_sobre\\_la\\_eficacia\\_de\\_estas](https://www.academia.edu/33441612/Ejecuci%C3%B3n_de_sentencia_en_litigios_de_reforma_estructural_Dificultades_pol%C3%ADticas_y_procedimentales_que_inciden_sobre_la_eficacia_de_estas) Resolución de fecha 16/12/2021 del Juzgado Federal en lo Crim. y Corr. de MoronNº 2 en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional s/ejecución de sentencia”.

<sup>16</sup> “Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”, CSJN, sentencia del 03/05/2005, Fallos 328:1146.

<sup>17</sup> Verbitsky, Horacio S/ Habeas CorpusCSJN, sentencia del 13/05/2021 Fallos 344:1102.



no se encontraba cumplida por lo que revocó la decisión de la SCBA, remitiéndole la causa a los fines de que avanzara en la ejecución de la primera sentencia<sup>18</sup>.

Como consecuencia de lo expuesto, la SCBA dispuso la realización de audiencias virtuales con las partes involucradas<sup>19</sup> en las que se acordó un Programa de Cumplimiento de Sentencia (PCS) a ejecutarse por medio de una serie de decisiones y mediante la colaboración de instituciones específicas<sup>20</sup>. A los fines de la creación de esa nueva institucionalidad, muy recientemente el tribunal dispuso la creación de la “Autoridad de implementación y Seguimiento de Cumplimiento de la Sentencia”<sup>21</sup> como órgano de implantación y seguimiento principal. A este se le encomienda establecer un esquema organizativo y funcional, un conjunto de programas de actividades y un sistema de seguimiento para implementar el PCS, dotándola de múltiples funciones (Art. 4º Acordada 4064/22). Crea asimismo un Observatorio Participativo del PCS a los efectos de interactuar con este organismo en la ejecución del mencionado plan (Art. 5 Acordada 4064/22).

A la luz de los antecedentes reseñados, resulta útil poner la mirada en el derecho estadounidense<sup>22</sup> en el que la existencia de otros terceros que, sin ser *amicus curiae*, intervienen en el desarrollo del proceso encontrándose su participación ampliamente aceptada e incluso legislada.

<sup>18</sup> Veric, Francisco ““La Prueba de Cumplimiento de Sentencias de Reforma Estructural. Notas sobre la decisión de la Corte Suprema Argentina en “Verbitsky II”, en *Revista Actio Legis* N° 2 (2022, en edición), Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, consultado en [https://www.academia.edu/78856912/La\\_Prueba\\_de\\_Cumplimiento\\_de\\_Sentencias\\_de\\_Reforma\\_Estructural\\_Notas\\_sobre\\_la\\_decisi%C3%B3n\\_de\\_la\\_Corte\\_Suprema\\_Argentina\\_en\\_Verbitsky\\_II](https://www.academia.edu/78856912/La_Prueba_de_Cumplimiento_de_Sentencias_de_Reforma_Estructural_Notas_sobre_la_decisi%C3%B3n_de_la_Corte_Suprema_Argentina_en_Verbitsky_II)

<sup>19</sup> Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Defensoría Oficial ante el Tribunal de Casación Penal, la Procuración General de la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo bonaerense.

<sup>20</sup> verbitsky horacio – representante de Centro de Estudios Legales y Sociales s/habeas corpus. Recurso de Casación, SCBA Resolución del 03/05/2021.

<sup>21</sup> SCBA Acordada N° 4064 del 02/06/2022.

<sup>22</sup> Verbic, op. cit.; Punte, Roberto Antonio “Una medida para incorporar a nuestra práctica tribunalicia: el abogado auxiliar de la justicia en la ejecución de sentencias complejas” (2014), El Dial.com consultado en [https://www.eldial.com/nuevo/suple-constitucional\\_oe.asp?Edicion=15/07/2014](https://www.eldial.com/nuevo/suple-constitucional_oe.asp?Edicion=15/07/2014); Galisteo, Eduardo Eduardo Rogelio (2019) *Diarios Civil y Obligaciones* Nros. 1887 - 20/05/2019 consultado en <https://classactionsargentina.com/2019/05/29/ejecucion-de-sentencias-en-procesos-de-reforma-estructural-la-figura-de-los-special-masters/>.





El art. 53 de las reglas de procedimiento civil federal de Estados Unidos (*Federal Rules of Civil Procedure* - FRCP)<sup>23</sup> contempla la posibilidad de que un tribunal designe un asistente (special master) para que lo asista en alguna etapa del proceso<sup>24</sup>.

Desde un primer momento la figura legislada por la Rule 53 de las FRCP fue pensada con la finalidad de coadyuvar a los jueces en el desarrollo de sus tareas, especialmente aquellas que no implicaban actividad jurisdiccional propiamente dicha. Y si bien en un principio la intervención de estos expertos requería la presencia de condiciones extraordinarias en el proceso, lo cierto es que su actuación se fue expandiendo a medida que los casos se fueron complejizando. Y aun cuando no se encuentra libre de cuestionamientos, la utilización de la figura es ampliamente aceptada por todos los tribunales federales de ese país.

Conforme a la regulación actual su designación se encuentra prevista cuando las partes lo consideren necesario, brindando para ello su consentimiento o, a criterio del juez, cuando se encuentra justificada por alguna circunstancia excepcional<sup>25</sup>. En los juicios por jurado la normativa bajo análisis limita su participación a determinadas cuestiones expresamente previstas. En todos casos las tareas que se le asignan pueden ser previas a la audiencia de juicio o posteriores<sup>26</sup> a ella, estableciéndose reglas procedimentales aplicables para el nombramiento

<sup>23</sup>Las reglas se pueden consultar en <https://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-rules-civil-procedure>.

<sup>24</sup> Existe una mención a este tipo de figura en Geoffrey C. Hazard Jr y Taruffo Michele “La Judicia Civil en los Estados Unidos”, Ed. Aranzadi, Navarra, 2006, p. 223.

<sup>25</sup> Un estudio sobre la actividad de este tipo de expertos realizado por Federal Judicial Center en el año 2000, previo a la última modificación de la Rule 53 efectuada en el año 2003, refería que si bien la regla pretendía abarcar bajo esta denominación a asistentes designados para satisfacer la necesidad de conocimiento experto de tribunal respecto de los hechos o la evidencia para un caso complejo, en la práctica la actividad desarrollada por estos se extendió a cuestiones previas y posteriores al proceso, tales como el seguimiento del cumplimiento de las órdenes emitidas por el tribunal. Atribuye esta extralimitación al consenso y consentimiento de las partes respecto a ello. Describe que a veces las partes acordaban entre ellas la necesidad de contar con este experto para determinada tarea, presentándole al juez una propuesta para su designación, o bien el magistrado, al enfrentarse a un complejo volumen de actividad, frente a la falta de otra solución designaba un experto. Y en caso de que alguna de las partes no pudiera afrontar el pago del mismo se recurrió a soluciones alternativas, tales como designar a otro magistrado para que actuara como experto (magistrate judge)” Willging Thomas E., Hooper, Laural L., Leary Marie, Miletich Dean, Robert Timothy Reagan, and Shapard John “Special Masters’ Incidence and Activity - Report to the Judicial Conference’s Advisory Committee on Civil Rules and Its Subcommittee on Special Master” (2000) Federal Judicial Center. <https://www.uscourts.gov/sites/default/files/specmast.pdf>.

<sup>26</sup> El estudio efectuado por el Federal Judicial Center afirma que todos los participantes consultados se encontraban satisfechos con la actuación del experto en el proceso, resaltando mayores los beneficios obtenidos que las desventajas. En cuanto a la superposición de funciones entre los distintos sujetos de un proceso, el informe reconoce que las mismas existieron respecto de las tareas realizadas antes o durante el juicio, pero nunca en lo referido a las acciones de cumplimiento de la sentencia, reconociendo que en este aspecto la presencia del experto fue muchas veces fundamental; None of the special masters who performed posttrial functions told us that a



de los expertos, así como los motivos para su apartamiento. Agrega que, al momento de designar un experto, la corte debe considerar la incidencia de ello en los costos para las partes y la duración del procedimiento. La designación debe determinar con exactitud las tareas a desempeñar y también la forma en que se comunicará con las partes y con el tribunal como la designación puede ser modificada en cualquier momento, previo traslado a las partes.

La regulación estatuye el régimen de revisión de la actuación del experto, imponiendo que si las conclusiones sobre los hechos a las que arriba son observadas por alguna de las partes, el tribunal debe revisarlos nuevamente, salvo que las partes, con la aprobación del tribunal, hayan estipulado que a) sólo son revisadas en caso de error evidente, b) que las conclusiones arribadas por el experto son definitivas. Las conclusiones acerca del derecho siempre deben ser sometidas a revisión por el tribunal.

En relación a los honorarios del experto, se establece que deben ser fijados por el tribunal, debiendo imponerse el pago a las partes o a un fondo que fuera materia de la acción planteada y que se encuentre bajo el control del tribunal. Esta obligación puede ser distribuida entre las partes en atención a la naturaleza y monto de la controversia, los medios económicos de cada parte y la proporción en que una parte tiene más incidencia en la necesidad de convocar un experto respecto de otra parte. Cualquier decisión provisional respecto de la distribución del pago puede ser modificada en virtud de la decisión final que se adopte.

Las diferentes misiones que se otorgan a estos expertos implican un alto grado de especialidad que abarca desde la ayuda en el análisis de evidencia electrónica que se presenta en grandes cantidades (especialmente en las acciones colectivas), la declaración como expertos en un juicio, especialmente en casos que tratan de asuntos técnicos muy especializados, la coordinación de juicios interjurisdiccionales con múltiples partes, la facilitación de acuerdo entre partes, el monitoreo del cumplimiento de las decisiones adoptadas por el tribunal<sup>27</sup>. Siguiendo a Shira A. Scheindlin<sup>28</sup> pueden señalarse cuatro razones que empujan a un tribunal

---

magistrate judge could have performed their roles, such as administering settlements in class actions and monitoring compliance with consent decrees” (Willing., *op cit.* p. 10).

<sup>27</sup> El informe elaborado en el año 2020 por The Academy of Court-Appointed Masters (ACAM) elabora un informe que identifica 19 tipos distintos de expertos.

<sup>28</sup> “We Need Help: The Increasing Use of Special Masters in Federal Court”, De Paul Law Review 479 (2009) <https://via.library.depaul.edu/law-review/vol58/iss2/11/> Es necesario destacar que la autor fue jueza federal del Estado de Nueva York por más de 20 años, habiendo ejercido antes y después distintos cargos vinculados con la magistratura.



a recurrir a estos expertos: 1) cumplimientos de plazos; 2) conocimiento y experiencia, 3) recursos y 4) neutralidad.

En primer lugar, refiere que existen tareas que consumen demasiado tiempo como para que sean desarrolladas por el juez, el que, de hecho, en la actualidad delega muchas de ellas a los funcionarios que lo acompañan. Señala como ejemplo el análisis de documentación voluminosa o el monitoreo del cumplimiento a largo plazo de sentencias cuyo efectos se extienden en el tiempo, y que puede llegar a convertirse por sí sola en una tarea de tiempo completo para el magistrado. Como ejemplo de este último supuesto menciona de designación de un experto para que realice la verificación, a lo largo del tiempo, del cumplimiento de una sentencia que establecía la obligación de una escuela de otorgar educación a niños con capacidades diferentes<sup>29</sup>, o la que imponía obligaciones a cargo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el marco de una demanda colectiva efectuada por campesinos que habían alegado discriminación en las financiaciones estatales<sup>30</sup> otorgadas.

Otras de las razones para designar un experto radica la necesidad de contar con personas que cuenten con determinadas habilidades que no versen sobre la cuestión en litigio pero que resulten necesarias para manejar algún aspecto vinculado con el desarrollo de este, tales como las destrezas computacionales, requeridas para administrar la gran cantidad de prueba electrónica (ESI Electronic Stored Information) ofrecida en determinados reclamos, generalmente de naturaleza colectiva<sup>31</sup>. Los expertos pueden asimismo ser convocados en aras de sus acabados conocimientos en materias científicas, técnicas o artísticas sobre las que recae el conflicto y que exceden los conocimientos del tribunal, permitiendo el dictado de decisiones más equitativas y precisas.

Por otra parte esta autora señala que, para la resolución de determinados cuestiones de alta complejidad, se requiere la actuación de un equipo interdisciplinario que trabaje en forma conjunta, o por lo menos de forma coordinada, habiéndose, en determinadas ocasiones, delegado en el experto el rol de convocar y coordinar a los especialistas de las distintas áreas.

<sup>29</sup>Blackman v. District of Columbia, 185 F.R.D. 4, 5 (D.D.C. 1999).

<sup>30</sup>Reference to a Monitor, Pigford v. Glickman, No. 97-1978 (D.D.C. Jan. 4, 2000).

<sup>31</sup>La autora menciona una causa multijurisdiccional relativa a patentes de invención de instrumental médico entablada por el fabricante contra el inventor (Medtronic Sofamor Danek v. Michelson 229 F.3d 1212 (W.D. Tenn. 2003)) en el que el experto fue designado a los fines de diagramar la información que era necesaria y aconsejar a las partes los medios más eficientes y económicos de obtenerla.



La necesidad de contar con un experto en aras de la neutralidad hace referencia especialmente al momento en que las partes se encuentran negociando un acuerdo que luego será sometido a la consideración del juez para su aprobación. En estos supuestos la presencia de un experto que conduzca estas negociaciones surge como aconsejable a los fines de evitar que las partes se vean compelidas a adoptar las sugerencias de acuerdos planteadas por el tribunal por temor a que, en caso contrario, se adopten decisiones contrarias a sus intereses, o lo que es peor, que dichas decisiones sean adoptadas por ese mismo motivo.

Claramente el beneficio aparejado por la intervención de estos expertos radica en la obtención de sentencias más eficaces, en especial en relación a aquellas acciones colectivas que resultan complejas o bien por los temas a decidir, o por la cantidad de actores involucrados o incluso por las sentencias dictadas. Las críticas, por otro lado, se centran en los elevados costos que trae aparejada la figura, lo que importa que no se encuentra al alcance de todos, configurando un escenario en el que existen justicias de calidades distintas de acuerdo con las posibilidades económicas de quiénes acuden a ellas.

Del panorama efectuado acerca de los expertos y de las distintas funciones que se le pueden encomendar en el proceso, puede concluirse que los mismos claramente son terceros que se constituyen en colaboradores del tribunal, pero con características muy diferentes a los “amigos de tribunal”<sup>32</sup>.

En primer lugar porque estos asistentes actúan materialmente, desplegando tareas encomendadas por un juez mediante un acta de designación que especifica las acciones que debe llevar adelante. Es decir, no se limitan a aportar una mirada distinta sobre la cuestión en debate, sino que despliegan acciones concretas.

Otra distinción que debe realizarse con respecto al *amicus curiae*, y que ya ha sido enunciada al inicio de este análisis, es la oportunidad procesal en la que intervienen unos y otros. Así, mientras la ayuda de los amigos del tribunal está enfocada al momento del dictado de la sentencia, la actividad de los expertos puede desplegarse antes de la audiencia de juicio, durante la etapa probatoria e incluso con posterioridad al dictado de la sentencia.

<sup>32</sup> “Estos expertos también son considerados terceros a los cuales el tribunal puede recurrir para la determinación de los hechos, si bien este tipo de actuación de los expertos debe ser requerida excepcionalmente y no como regla”. Brianne J. Gorod, *The Adversarial Myth: Appellate Court Extra-Record Factfinding*, 61 *Duke Law Journal* 1-79 (2011) p. 22. <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol61/iss1/1>



## 5. PENSANDO EN CLAVE LOCAL

La experiencia nos demuestra que determinadas figuras han sido extrapoladas de un sistema legal extraño al nuestro, la del *amicus curiae* entre ellas. Quizás en este último caso ello se haya visto facilitado por el aspecto afín al civil law que, como vimos, algunos autores le atribuyen a esta figura.

Por ello, aun cuando los expertos auxiliares del juez a los que nos venimos refiriendo, resulten una creación típica del sistema adversarial, en el que las partes son dueñas del proceso y como tales pueden disponer la convocatoria de estos, es posible, y hasta aconsejable, plantearse la implantación de la misma en nuestro medio.

¿Por qué no pensar en la designación de expertos facilitadores que intervengan en el cumplimiento de sentencias estructurales complejas, con efectos extendidos en el tiempo, muchas veces en etapas interdependientes unas de otras<sup>33</sup>?

Sabida es la dificultad que existe muchas veces al momento de hacer efectivas las sentencias dictadas en procesos colectivos<sup>34</sup>, que justamente son los que deberían tener garantizado el cumplimiento, atento el alcance de los efectos buscados. Al respecto la Corte Suprema ha manifestado que las sentencias emanadas del Poder Judicial han de ser entendidas como “de cumplimiento obligatorio e inmediato”. Porque sin esto se rompe la garantía del debido proceso en la medida en que no se aseguren “mecanismos efectivos para hacer cumplir las decisiones que pongan fin a los conflictos” .... (considerando 10). Lo contrario convierte el acudir la Justicia en una “mera declamación retórica de los Jueces”, si sus decisiones no son respetadas y cumplidas por las autoridades. De lo contrario “resulta artificial invocar la obligatoriedad de las reglas constitucionales si las mismas no se cumplen”. De ahí que existe un derecho a “la efectividad de las resoluciones de los Jueces”, pues “cuando la Constitución

<sup>33</sup>Verbic, op cit.

<sup>34</sup> Ya en el año se trataba esta temática en el seminario internacional “Remedios judiciales y monitoreo de ejecución de sentencias en el litigio de reforma estructural. Desafíos a la luz de experiencias en los Estados Unidos, India, Sudáfrica y Argentina” organizado por la Facultad de Derecho de la UBA, sin que hasta la fecha se haya encontrado aún una solución.



Nacional reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y no meramente ilusorios” (considerando 11)<sup>35</sup>.

La posibilidad de recurrir a este tercero participante activo en la etapa de ejecución del proceso es compartida por autores tales como Francisco Verbic<sup>36</sup>, quién afirma que si bien esta herramienta podría ser incorporada al ordenamiento local, para que funcione sin generar conflictos adicionales, debe hacerse generando un marco de inmediatez entre el funcionario designado y las partes, estableciendo mecanismos de supervisión y control entre el sentenciante, que no se deslinda de responsabilidad<sup>37</sup>, y el tercero designado para ejecutar la manda judicial. Resulta interesante el planteo que efectúa en relación a los costos que la intervención de un experto de estas características genera para las partes, afirmando que el Estado podría estar en condiciones de subsidiarlo mediante la reinversión de una parte de los recursos que se ahorran en el sistema gracias al tratamiento colectivo del asunto.

Punte<sup>38</sup>, por su parte afirma que la viabilidad del nombramiento de una figura similar al special master en nuestro medio enraíza con el deber constitucional del Estado argentino de "afianzar la justicia", modernamente reforzado por sus compromisos internacionales que lo obligan a asegurar desde lo funcional sean cumplidas las obligaciones judiciales de “administrar justicia bien y legalmente” (art.112°CN) y esto “en un plazo razonable” (art.8° CADHH), lo que no se refiere sólo a la celeridad del proceso; pues incluye también el derecho al cumplimiento efectivo de las sentencias, según los principios de “recurso efectivo”, para “hacer valer sus derechos”, que cuentan con debida jerarquía constitucional, a través de su inserción en las Declaraciones Americana (18°) y Universal (8°).

Este autor refiere como sustento normativo para ello la facultad de convocar a un mediador intraproceso, entendiendo obviamente que la etapa de ejecución de sentencia es parte del proceso, en los términos del art. 36 inc. 2° del CPCCN que otorga al juez una facultad judicial amplia de "proponer y promover" dentro de cualquier etapa del proceso que las partes deriven su litigio a "otros medios alternativos de resolución de conflictos lo que es reiterado

<sup>35</sup> CSJN “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. c/ Estado Nacional s/ amparo ley 16.986” 11/02/2014, fallo citado por Punte, Roberto Antonio op. cit.  
SENTENCIA

<sup>36</sup>Verbic, Francisco op. cit.

<sup>37</sup> En este extremo coincide Galisteo en la obra citada (Nota 9).

<sup>38</sup>Punte, Roberto Antonio op. cit (v. Nota 9)





en la apertura de la audiencia de prueba (art.360 inc.1º CPCCN). Agrega que ello coincide asimismo con las facultades previstas en el artículo 558 bis, en cuanto que el juez podrá fijar una audiencia “para que comparezcan ejecutante y ejecutado con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar perjuicios innecesarios”.

A las consideraciones reseñadas cabe añadir que las partes gozan de la posibilidad de efectuar convenciones procesales que, siempre dentro de los límites establecidos por el orden público, les permiten realizar adaptaciones del proceso. Si bien este tipo de acuerdos no goza, a nivel de autorización genérica, de una recepción legislativa propiamente dicha, lo cierto es que el uso de las mismas resulta cada vez más habitual<sup>39</sup>.

Entre los acuerdos contemplados por la regulación positiva se encuentra justamente el de designar en forma conjunta uno de los terceros que actúan en el proceso como auxiliar del juez, esto es, el perito. Así el art. 462 CPCC establece que antes de que el juez designe perito de oficio, las partes de común acuerdo, podrán presentar un escrito proponiendo perito y puntos de pericia.

Si la norma confiere a expresamente a las partes la facultad de designar en forma conjunta un tercero cuya actuación imparcial probablemente resulte fundamental a la hora de determinar la existencia y alcance de los derechos en pugna, parecerían no existir razones de peso para que ese mismo acuerdo se permita en la etapa donde esa determinación ya se encuentra realizada por un acto jurisdiccional, con todas las garantías que ello conlleva, y lo que resta es hacerlo efectivo.

## 6. CONSIDERACIONES FINALES

Como hemos visto, si bien “amigo del tribunal” hay uno solo, lo cierto es que existen otros aliados que deben ser tenidos en cuenta a la hora de enfrentar los desafíos actuales que plantean los procesos colectivos, cada vez más complejos.

<sup>39</sup>Mosmann, Maria Victoria “Convenciones procesales” (2020) en Homenaje del Instituto Noroeste de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba al Presidente Honorario, profesor Doctor Julio I. Altamira Gigena, obra colectiva Dir. Veiga Juan Carlos, Padilla Rodrigo, Coord. Sahián José H., IJ Editores, consultado en [https://www.academia.edu/68289616/Convenciones\\_procesales](https://www.academia.edu/68289616/Convenciones_procesales)



Como en todo grupo de amigos, algunos tienen comportamientos tradicionales y se encuentran expresamente contemplados por la normativa. Otros pugnan por ser parte del grupo. Pero todos suman en momentos distintos y satisfaciendo necesidades diferentes.

Es en función de las respuestas que se exigen a la justicia, cada vez más acuciantes, que resulta necesario pensar en soluciones nuevas y posibles. Entre ellas se encuentra el “experto colaborador del juez” al que nos hemos referido más arriba, del que se pretende no una delegación de jurisdicción sino de la presencia de un tercero colaborador que realice tareas claramente delimitadas, trabajando en conjunto con las partes, reportando directamente al juez.

## REFERENCIAS

- DURRIE, Roberto (h.) “Repensando el rol del amicus curiae en el derecho penal argentino” TR LALEY AR/DOC/4119/2019.
- CREMA, Luigi “TheCommonLaw (And NotRoman) OriginsofAmicusCuriae in International Law – Debunking a Fake NewsItem” (2019) Global Jurist. 20.10.1515/gj-2019-0038. [https://www.researchgate.net/publication/338027720\\_The\\_Common\\_Law\\_And\\_Not\\_Roan\\_Origins\\_of\\_Amicus\\_Curiae\\_in\\_International\\_Law\\_-\\_Debunking\\_a\\_Fake\\_News\\_Item/citation/download](https://www.researchgate.net/publication/338027720_The_Common_Law_And_Not_Roan_Origins_of_Amicus_Curiae_in_International_Law_-_Debunking_a_Fake_News_Item/citation/download).
- GOROD Brianne J., “The Adversarial Myth: AppellateCourt Extra-Record Factfinding”, 61 Duke LawJournal 1-79 (2011) p. 22. <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol61/iss1/1>.
- GOZAINI, Osvaldo “Las pruebas de colaboración” (2010) TR LALEY AR/DOC/722/2010.
- HAZARD Jr Geoffrey C. y TARUFFO Michele “La Justicia Civil en los Estados Unidos”, Ed. Aranzadi, Navarra, 2006, p. 223.
- KOCHEVAR Steven “Amici Curiae in Civil LawJurisdictions”, The Tale LawJournal (2013) 122:1653 consultado en [https://www.yalelawjournal.org/pdf/1158\\_hvj33ruz.pdf](https://www.yalelawjournal.org/pdf/1158_hvj33ruz.pdf).
- MOSMANN, María Victoria “Amicus Curiae”, Revista Temas Judiciales nro. 4.
- MOSMANN, María Victoria – DOMINGUEZ, “Amicus Curiae”, *Revista Temas Judiciales* nro. 15.
- MOSMANN - ARDOY, “Recurso de Inaplicabilidad de Ley”, Tratado de los Recursos, Midón Director, Ed. Rubinzal-Culzoni, t. II, ps.571/604.



- MOSMANN - ARDOY, "Algunas cuestiones sobre la Jurisprudencia Uniforme y los Amicus Curiae", *Precedetes, Colecao Grandes Temas do Novo CPC*, Editora Jus Podium, Salvador Brasil, t. 3, ps. 701/728.
- MOSMANN, María Victoria "La prueba pericial y los amicuscuriae" en "La Prurba pericial" op. cole. Dir. María Victoria Mosmann, Coord. Sofía Beneavidez- Ed. Bibliotex, Tucumán, 2020.
- MOSMANN, Maria Victoria "Convenciones procesales" (2020) en Homenaje del Instituto Noroeste de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba al Presidente Honorario, profesor Doctor Julio I. Altamira Gigena, obra colectiva Dir. Veiga Juan Carlos, Padilla Rodrigo, Coord. Sahián José H., II Editores, consultado en [https://www.academia.edu/68289616/Convenciones\\_procesales](https://www.academia.edu/68289616/Convenciones_procesales).
- SCHEINDLIN Shira A. "We Need Help: The Increasing Use of Special Masters in Federal Court:", De Paul Law Review 479 (2009) <https://via.library.depaul.edu/law-review/vol58/iss2/11/>
- PUNTE, Roberto Antonio "Una medida para incorporar a nuestra práctica tribunalicia: el abogado auxiliar de la justicia en la ejecución de sentencias complejas" (2014), El Dial.com consultado en [https://www.eldial.com/nuevo/suple-constitucional\\_oe.asp?Edicion=15/07/2014](https://www.eldial.com/nuevo/suple-constitucional_oe.asp?Edicion=15/07/2014)
- ROGELIO, Eduardo. (2019) *Diarios Civil y Obligaciones* Nros. 1887 - 20/05/2019 consultado en <https://classactionsargentina.com/2019/05/29/ejecucion-de-sentencias-en-procesos-de-reforma-estructural-la-figura-de-los-special-masters/>.
- VERBIC, Francisco. "Ejecución de sentencias en litigios de reforma estructural en la república argentina. Dificultades políticas y procedimentales que inciden sobre la eficacia de estas decisiones", Ponencia General presentada por el autor en la sub-comisión de derecho procesal constitucional "Ejecución de sentencias en litigios estructurales y complejos. La eficacia del Poder Judicial en el control de políticas públicas", *XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal*, Córdoba, Argentina, 18-20 de Septiembre de 2013, consultada en [https://www.academia.edu/33441612/Ejecuci%C3%B3n\\_de\\_sentencia\\_en\\_litigios\\_de\\_reforma\\_estructural\\_Dificultades\\_pol%C3%ADticas\\_y\\_procedimentales\\_que\\_incide\\_n\\_sobre\\_la\\_eficacia\\_de\\_estas\\_](https://www.academia.edu/33441612/Ejecuci%C3%B3n_de_sentencia_en_litigios_de_reforma_estructural_Dificultades_pol%C3%ADticas_y_procedimentales_que_incide_n_sobre_la_eficacia_de_estas_).



VERBIC, Francisco “La Prueba de Cumplimiento de Sentencias de Reforma Estructural. Notas sobre la decisión de la Corte Suprema Argentina en “Verbitsky II”, en *Revista Actio Legis* N° 2 (2022, en edición), Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, consultado en

[https://www.academia.edu/78856912/La\\_Prueba\\_de\\_Cumplimiento\\_de\\_Sentencias\\_de\\_Reforma\\_Estructural\\_Notas\\_sobre\\_la\\_decisi%C3%B3n\\_de\\_la\\_Corte\\_Suprema\\_Argentina\\_en\\_Verbitsky\\_II\\_](https://www.academia.edu/78856912/La_Prueba_de_Cumplimiento_de_Sentencias_de_Reforma_Estructural_Notas_sobre_la_decisi%C3%B3n_de_la_Corte_Suprema_Argentina_en_Verbitsky_II_).

WILLGING Thomas E.; HOOPER, Laural L.; LEARY Marie; MILETICH, Dean; ROBERT Timothy; SHAPARD, John. “*Special Masters’ Incidence and Activity - Report to the Judicial Conference’s Advisory Committee on Civil Rules and Its Subcommittee on Special Master*”, 2000. Federal Judicial Center.  
<https://www.uscourts.gov/sites/default/files/specmast.pdf>.